



Por Enrique Vásquez

## ¿Cómo hacer la mejor **INVERSIÓN EN EL PERÚ?** Invirtiendo en los **niños y las niñas, primero**

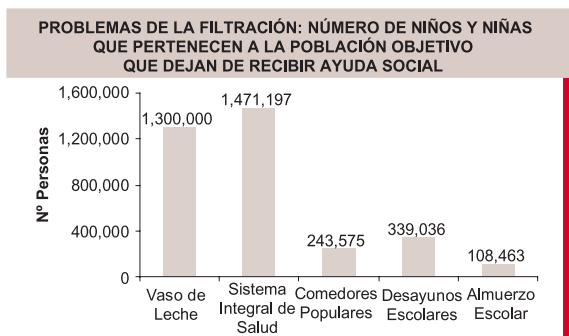
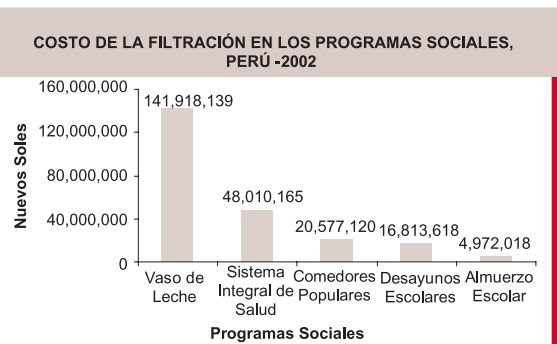
La amplitud e intensidad del desamparo en el que se encuentra la mayor parte de las niñas y los niños en el Perú representa una imagen recurrente en el Perú. La inversión focalizada en la infancia a través de salud, saneamiento, nutrición, educación y justicia respecto del porcentaje del Presupuesto General de la República no es poco significativa, pero tampoco es suficiente: 22.5% del presupuesto cuando debería ser 45%. Quizá lo más preocupante es la baja rentabilidad de esta magra inversión en los niños (casi US\$ 1,000 millones frente a los US\$ 5,000 millones en Chile):

los indicadores sociales de desnutrición crónica, limitadísimo acceso a los servicios de agua y desagüe, rendimiento escolar a pruebas estándares y reconocimiento legal inexistente de las niñas y los niños, revelan un bajo rendimiento del esfuerzo gubernamental por mejorar el bienestar de los más vulnerables.

El mensaje aquí no es que el Estado deje de cumplir con su papel de respetar los derechos de los niños y las niñas, y por tanto desactivar los programas sociales. Todo lo contrario, el mensaje es que con los recursos disponibles y sin necesidad de utilizar el argumento de que 'en nombre de los niños pobres del Perú' necesitamos más impuestos, de todas maneras, se puede ejecutar una inversión eficiente, eficaz, equitativa y transparente para que 3.5 millones de niños puedan mejorar su calidad de vida.

El libro de *Save The Children/ Universidad del Pacífico* "¿Los niños...primero?" Vol.II, llama la atención sobre esta imagen de poca o nula efectividad del gasto público social focalizado en la infancia y adolescencia, traducido en inequidades entre lo urbano y lo rural, lo masculino y lo femenino, el pobre extremo y el no pobre. Si bien el Gobierno ha diseñado un Plan Nacional de Acción de la Infancia, el problema sigue siendo la ejecución de las políticas sociales. Urge un cambio en la gerencia social de los programas que deberían centrar su preocupación en la niñez. ¿Por qué? Porque 3.5 millones de niños y niñas dejan de ser atendidos por el Estado por una mala administración de los recursos públicos. Una primera medición se presenta en el Cuadro N° 1 donde se ha calculado la filtración de cinco programas sociales; es decir, se ha medido el número de niños y niñas por programa que se dejan de atender por brindar ayuda a personas que no son la población objetivo, pero que se aprovechan de sus cercanías a las esferas de decisión.

¿Cómo se puede lograr ello? Se debe partir por construir un sistema de información para evitar, por ejemplo, que más de 700,000 personas mayores de 15 años tomen el 'vaso de leche' cuando no les corresponde. Esto significa que se precisa de un sistema de identificación de usuarios para saber quién, de la población meta, recibe o no y cuánto del gasto social llega efectivamente a ellos. Luego se precisa de mecanismos de compra y distribución de los bienes públicos (leche, alimentos, atención de salud, registro civil, etc.) por el cual el proveedor principal sea el privado para reducir los costos y mejorar la cobertura. Como lo diría el propio ministro Bruce, el hecho de que los programas sociales destinen casi el 60% de sus recursos a la administración es muy poco rentable socialmente y evita que más recursos lleguen a los que más necesitan. Finalmente, es importante desarrollar una cultura de evaluación que no solo involucre a los funcionarios públicos sino también a los dirigentes de las organizaciones sociales de base. Ambos tienen el deber de mejorar la rentabilidad social de la inversión en nuestros niños y niñas, hoy. No mañana por aquello de que los niños son 'el futuro del país', sino hoy; porque desde hoy hay que respetar sus derechos. ■



¿Cuánto le cuesta a los contribuyentes este error de gerencia social de los programas? Al ver el Cuadro N° 2 se puede constatar que haciendo una reforma radical se podría evitar el forado de más de 200 millones de soles anuales que implica la baja calidad de la administración pública.